

POLÍTICA Y PODER

EL GRAN ENROQUE DE LA CÚPULA POLICIAL

CAMBIOS RADICALES EN EL MANDO: LA REESTRUCTURACIÓN
DE FONDO QUE SACUDE A LA POLICÍA NACIONAL



Se acaba el tiempo
del ministro Carlos Negro

A propósito de los dichos de «Adolfo Garcé»

Defendamos la utopía

«A veces Orsi parece un político amateur, siendo un hombre que lleva toda su vida en la política. Y es también por estar acostumbrado a la política departamental. Y que me perdona la gente que hace política a nivel departamental, pero la política en ese nivel y el ejercicio del poder en el departamento tiene mucho menos vigilancia, escrutinios, controles y oposición. Tiene menos de todo, y se puede arreglar todo a través de los favores y la relación interpersonal. Los intendentes tienen las manos mucho más libres y están acostumbrados a estar menos controlados. Ese es el mundo en el que se crió Orsi, que es poco exigente», esto lo dijo -en tono de sentencia- al semanario CRÓNICAS, el politólogo Adolfo Garcé.



Quizá esta conceptualización de la política haya pasado inadvertida. Pero la realidad es que se parece mucho más a un ataque subversivo, que a una opinión que lo que pretende es criticar un desbarajuste, pasándole la factura no -a la persona Yamandú Orsi-, sino a la condición de ex intendente del actual presidente de la República. Y esto, en buen romance, -y vaya también en modo especulativo- se parece mucho a un mandado mal hecho, tanto o más que el que pretendió hacer Jorge Díaz a Orsi, cuando alegando a su favor intentó defenderlo diciendo que la rebaja del precio de venta de la cuestionada Hyundai Santa Fe, se la habían hecho una semana antes de asumir la primera magistratura del país, por lo que no había nada para reprochar desde el punto de vista legal.

En este mundillo entreverado y confuso, es cierto que el presidente no ha estado exento de recibir las esquivas del «fuego amigo» generado desde sus compañeros, o que el periodismo denunciante lo que hizo fue su trabajo, pero este engendro con todas sus desprolijidades tuvo una fuente de la información que esta por fuera del tratamiento que se le dio cuando se comprobaron las irregularidades. Por eso es por lo que cuando salía un dato, sobrevinía otro dato aditivo que agrava el contexto determinado por el anterior.

Y es precisamente por todo esto que los dichos de Adolfo Garcé constituyen un profundo ataque institucional, porque lo hace al mejor estilo de la subversión intelectual del final de los años 60 en Uruguay, cuando al unísono -milicos y la oposición izquierdista-, atacaban desproporcionadamente a un puñado de ediles en Montevideo, pintando al país como el epicentro de una casta corrupta, mientras los libertarios de aquél entonces, y con sus discursos bastante parecidos a los de ahora, reivindicaban más allá del voto de los republicanos, una revolución que ni el Che Guevara ni los militares más radicales, reivindicaban en favor de sus historias mal contadas.

Los que como Garcé creen que hay gobiernos de primera y de segunda, lo que hacen con sus discursos es cuestionar la esencia de la democracia. Sobredimensionar el análisis en sí mismo demuestra soberbia: sostener que hay más controles en lo nacional que en lo departamental, para alguien que como Garcé, está preparado para entender la institucionalidad mejor que la media ciudadana tan solo por ser politólogo, obliga a preguntarle qué es lo que habilita a este estado cuasi anárquico al que alude, porque en realidad cada gasto que hace un intendente es intervenido por el Tribunal de Cuentas al menos dos veces: cuando lo dispone y cuando lo paga, y porque las instancias de control de gestión son las

mismas a nivel nacional y departamental en cada etapa de rendición de cuentas bajo la lupa del Tribunal.

Lo que sucede a nivel departamental es que los que critican en un lugar son opositores en otro, por lo que censura adquiere visiones diferentes según el cristal con que se lo mire.

Pero vayamos a un ejemplo concreto: criticar el endeudamiento por fideicomisos o por préstamos bancarios cuando se pagarán más allá del tiempo de una gestión, se sostiene en que el disfrute de las obras lo harán varias generaciones, y no solo una. El Uruguay se construyó así sobre la base de los endeudamientos, y la capital del país, Montevideo, como toda metrópoli, es un ejemplo claro. Todas sus calles y avenidas fueron construidas de este modo; incluso las últimas grandes obras de la intendencia fueron planes del exintendente Daniel Martínez, que las hizo con la garantía de los ingresos futuros del fideicomiso SUCIVE que proyectó como aval los impuestos al cobro de su patente de rodados.

Quizá hoy mismo habría que hacer a nivel país aplicando los proyectos de participación pública privados, o los contratos CREMAF (Diseño, Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Financiamiento), que son los que habilitaron la inversión privada en el período pasado para las rutas nacionales.

Este sistema podría replicar en lo departamental, aunque claro está, según Garcé -los intendentes no estarían calificados para opinar-.

Por ejemplo, si todos entendemos que la caminería rural tan criticada y poco jerarquizada, es el verdadero polo para el desarrollo local: no habría que desvalorizar a las intendencias al extremo del ridículo, sino todo lo contrario, habría que dotarlas de instrumentos que sirvan para mover a un país parado. Las CREMAF departamentales serían un instrumento válido no sólo para arreglar ñas rutas, sino también para generar empleo y mover la construcción en todo el país.

Este tipo de iniciativas dejan en evidencia la desproporción de la visión de Garcé.

Con este mecanismo, una empresa o consorcio privado se encargaría de diseñar, financiar, intervenir y mantener una ruta departamental, adoptando como forma de pago el financiamiento que logre el propio contratista de la obra civil inicial con su propio capital o créditos bancarios. Una vez que los tramos se van terminando y habilitando, el Estado comienza a pagar mediante «Títulos de Pago por Hitos». La ventaja de este sistema es que los contratos son mucho más ágiles de licitar y estructurar que un proyecto público



Cesar GARCÍA ACOSTA
Editor del semanario **OPINAR**
Técnico en Comunicación Social

privado (PPP) tradicional, reduciéndose los plazos burocráticos sustancialmente, quedando siempre y hasta el final de las obras, un porcentaje razonable del pago final en garantía de la calidad de la obra.

Todo está inventado, pero la utopía no es un simple sueño irrealizable, sino que es el motor invisible que evita la parálisis de las sociedades y empuja hacia las fronteras de lo posible. A lo largo de la historia, lo que hoy consideramos derechos fundamentales nacieron en la mente de pensadores que se atrevieron a imaginar un orden social radicalmente distinto. Esa debería ser la obligación de Garcé como politólogo: mirar la institucionalidad desde el espacio ganado, y desde el cuestionamiento arbitrario.

Como decía Ortega y Gasset «yo soy yo y mis circunstancias y si no las salvo a ellas, no me salvo yo». El «Yo» representa lo interior de las personas, sea su consciencia, decisiones, su cuerpo y su voluntad, mientras que la «circunstancia» es todo lo que nos rodea y que no elegimos, incluyendo nuestra historia, el país, la familia, la sociedad y los problemas cotidianos.

Personalmente, como municipalista, es por eso por lo que prefiero plantarme en el año de 1516 cuando Tomás Moro acuñó un término intencionalmente ambiguo como la Utopía, el no-lugar que, al mismo tiempo, es el buen lugar.

Conjugar estos dos conceptos adecuadamente es lo que nos permite sostener que el batllismo no es una filosofía teórica o abstracta, sino una corriente y doctrina política e ideológica que aplica por el sentido de sus postulados al margen de las personas. Todo lo demás, bueno o malo, queda reservado al fuero de lo individual.

CONTENIDOS

Redactor Responsable
Tos César GARCÍA ACOSTA.

Domicilio:
Martín C. Martínez 1630/401
Montevideo-Uruguay

Teléfono:
098686686

Registro MEC
N° 2169/07, Tomo VI, fs. 388
Registro de Ley de Imprentas

Web: opinar.com.uy

Contacto:
cesargarciacosta@gmail.com

2 A propósito de los dichos de «Adolfo Garcé». Defendamos la utopía. **CESAR GARCÍA ACOSTA** 3 No es solo un problema de comunicación. **TABARÉ VIERA** 4 En gran enroque de la cúpula policial. **CRÓNICA** 5 POBRE POLICIA MIA Desorden de charreteras. **ZÓSIMO NOGUEIRA** 6 La vergonzosa salida fácil. **GUZMÁN A. IFRÁN** 7 Esperando la carroza (de la rebelión que no llega) **EDUARDO IRIGOYEN GARCÍA** 8 Abrir no es Aceder. **EDUARDO FAZZIO** 9 Competitividad y costo de vida: Oddone toma el timón. **RAMIRO ROSSI** 9 Uruguay mundial. **PABLO CAFFARELLI** 10 Durmiendo con el enemigo. **DANIEL MANDURÉ** 11 El aplauso de las ovejas. **RICARDO ACOSTA** 12 Como un barril sin fondo **GUSTAVO GÓMEZ RIAL** 13 Reacciones ante rendición de cuentas costo cero **MARCELO GIOSCIA** 13 La educación innovadora **DAVID AURIS VILLEGAS** 14 Choque de Modelos: Oddone descarta la sobretasa al Patrimonio tras la movilización del PIT-CNT. **CRÓNICA** 15 El juego de la mentira... ¡por el poder! **LORENZO AGUIRRE** 16 El dolor que algunos desprecian. **LUIS MARCELO PÉREZ**



**Tabaré VIERA DUARTE**

Senador. Fue intendente de Rivera, Presidente de Antel, director de Ose diputado, Vicepresidente del Congreso de Intendentes y ministro de Turismo.

No es solo un problema de comunicación

Un dirigente que se reivindica representante de los más humildes, compra, a pocos días de asumir la presidencia, una camioneta de lujo de unos 80.000 dólares, mientras buena parte de la gente atraviesa horas de dificultad económica. Ese es el punto de partida, y conviene no perderlo de vista entre tanta explicación.

Los hechos los conocemos gracias al trabajo periodístico de Patricia Madrid, no por iniciativa de los órganos de control. A partir de la declaración jurada del presidente Yamandú Orsi, donde la ya famosa camioneta Hyundai Santa Fe

organismo cuyos integrantes oficialistas han quedado seriamente desprestigiados, al punto de configurar tal vez la primera Junta abiertamente partidizada de nuestra historia reciente. Difícilmente un fallo así nazca con la credibilidad necesaria.

Conviene ser claro en el plano político. Nadie, absolutamente nadie, ha pedido que caiga Orsi ni ha hablado de juicio político. La oposición ha actuado con responsabilidad, y la prensa hizo lo que debía: investigar y denunciar. Por eso resulta inadmisibles correr el eje del debate hacia el financiamiento de las campañas, tema importante pero distinto, para no hablar de lo central: la conducta de un funcionario, agravada por tratarse del presidente de la República, que



figura por su valor de mercado, cercano a los 79.000 dólares, surgió que la factura, del 21 de febrero de 2025, fue por 54.000. Una diferencia de unos 25.000 dólares que desde el entorno presidencial llamaron «descuento». Parte del pago se habría hecho, además, entregando un vehículo donado para la campaña del Frente Amplio que, rifado y sin salir sorteado, terminó en el patrimonio privado del presidente para financiar su auto nuevo.

Aquí está el verdadero fondo, y no en un supuesto «error de comunicación». Algunos analistas —Gerardo Caetano entre ellos— reducen el episodio a fallas de comunicación y de gestión, e incluso se reprocha a la oposición querer voltear al presidente. Es un desvío. La oposición no le compró la camioneta a nadie. El problema lo creó solo Orsi: con la compra, y luego con explicaciones en capítulos, erráticas e insuficientes, que no terminan de cerrar porque no hay con qué cerrarlas.

Un presidente, digámoslo con todas las letras, no puede ni debe comprar un automóvil, una casa, ni un short de baño ni un colchón para su patrimonio personal con dineros públicos, pero tampoco de origen partidario. Que un auto donado a una campaña termine financiando un bien privado y de lujo no es de recibo. ¿Constituye delito? No lo sé; será la Justicia, si corresponde, quien lo diga. Lo que sí afirmo es que no es ético.

Tampoco es ético que un presidente electo acepte una rebaja inédita de 25.000 dólares sobre 80.000. Esa cifra excede largamente la ganancia razonable de cualquier importador: no se la vendieron al costo, tuvieron que poner dinero. Más que un descuento, parece un regalo. Y los regalos vinculados a la función pública son precisamente lo que la Ley de Ética Pública procura impedir. El argumento de que la compra evitaba a la P presidencia adquirir un vehículo seguro tampoco se sostiene: igual hubo que dotar de vehículos el traslado presidencial, y se ha informado que el primer mandatario alterna su rodado particular con los oficiales.

Quedan, además, preguntas sin respuesta. ¿De dónde salieron los 15.000 dólares restantes? En la conferencia del presidente no se leía con claridad de qué cuenta provino ese dinero transferido. Y falta el pronunciamiento de la JUTEP,

compró una camioneta de lujo aceptando un regalo de 25.000 dólares y pagándola, en parte, con un vehículo donado a un partido político.

El asunto, entonces, sigue plenamente vigente. Faltan explicaciones, falta el dictamen de la JUTEP y falta, sobre todo, que quien ejerce la más alta magistratura comprenda que la transparencia no se cumple por capítulos. Está en juego algo más que un vehículo: la confianza de los ciudadanos en quienes dicen representarlos.

Hay algo más de fondo que este episodio deja en evidencia: gobernar bien es hacerlo desde la organización y con los recursos que la República pone a disposición para ello. Para eso existe una residencia presidencial, Suárez y Reyes, con todas las comodidades, no solo para vivir, sino para trabajar, reunirse y recibir a otros mandatarios con dignidad y seguridad. Lo mismo vale para los automóviles oficiales: están para eso, conducidos por choferes profesionales, en vehículos del Estado y no particulares.

En los últimos años se instaló una suerte de moda populista: mandatarios que no aceptaron vivir en la Residencia de Suárez. Empezó con el Frente Amplio, con Tabaré Vázquez y luego con José Pepe Mujica. La consecuencia no es gratuita: cuando el presidente vive en su chacra o en un balneario, es el Estado el que debe salir a construir casillas, baños e instalaciones para la custodia, y a sumar comodidades y seguridad en una casa que es propiedad privada. Lo mismo ocurre con los vehículos. Y así, un presidente que quiere trasladarse en su auto propio para seguir la moda, para parecer popular, termina metido en este lío.

En un país republicano todos pueden llegar a la Presidencia, y todos tendrán el mismo lugar digno para vivir mientras la representan, y vehículos seguros para trasladarse si no tienen auto propio. ¡Basta! Es hora de que los gobernantes dejen de buscar popularidad por vivir en su chacra o en su casa del balneario, y se dediquen a ser populares por su gestión, resolviendo los temas que de verdad le importan a la gente. Cuánto nos habríamos ahorrado si el presidente Orsi hubiera actuado así.



En gran enroque de la cúpula policial

El ministro del Interior, Carlos Negro, concretó un sacudón histórico en la Policía Nacional de Uruguay al remover, rotar o enrocar a las máximas figuras del mando táctico, dejando en evidencia problemas internos agravados por la necesidad de frenar la escalada de violencia en las calles. Estos cambios en el comando policial se observan como la antesala, ante un eventual nuevo fracaso, de la sustitución de Carlos Negro como ministro del Interior y artífice de esta segunda versión del plan de contingencia del gobierno que aún no ha dado los resultados esperados.

LA NOCHE EN QUE TEMBLÓ EL MANDO: CRÓNICA DE UNA REESTRUCTURA DE FONDO La atmósfera en los pasillos del Ministerio del Interior en Montevideo era de absoluta pesadez. Afuera, la intensa niebla invernal

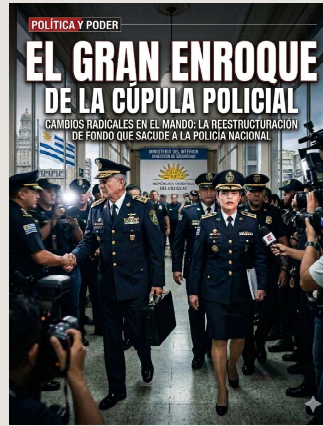


cubría la capital; adentro, la crisis de la violencia criminal y los constantes tiroteos barriales exigían decisiones drásticas que no admitían más demoras. No se trataba de repetir discursos vacíos. La orden del ministro Carlos Negro fue tajante: maximizar los recursos, optimizar el rendimiento y «recuperar las esquinas y las calles del país».

EL AJEDREZ DE LOS UNIFORMES AZUL MARINO La conferencia de prensa comenzó con la seriedad que ameritaba el anuncio. En un movimiento audaz de piezas, la jefatura más caliente del país cambió de manos. El Comisario General (R) Pablo Lotito dejó la codiciada Jefatura de Policía de Montevideo para trasladarse a la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. En su lugar asumió un hombre de territorio con un enfoque claro hacia las comisarías y la redistribución de agentes: Alfredo Clavijo, quien ahora carga sobre sus hombros la misión de contener el delito en las zonas operacionales más complejas de la capital.

La reestructura no se detuvo ahí. Las modificaciones alcanzaron el núcleo duro del despliegue táctico: **Subdirección de la Policía Nacional:** Asumió el Comisario General (R) Julio Sena. **Dirección Nacional de la Guardia Republicana:** La fuerza de choque quedó bajo el mando del Comisario Mayor Fabián Monzón. **Dirección de Asuntos Internos:** Fue designado el Comisario General (R) Julián Abraham.

UN CAMBIO RESPALDADO, PERO BAJO LA LUPA Mientras la cúpula policial se reconfiguraba, los sindicatos policiales vieron los relevos con buenos ojos, esperando que la nueva impronta traduzca el millonario presupuesto de seguridad —que incluye la incorporación de cientos de nuevas vacantes de agentes— en verdadero respaldo y protección para el policía de a pie.



Desde la vereda opuesta, la oposición política no tardó en reaccionar. Las críticas apuntaron a que la rotación de nombres no debe maquillar problemas de gestión profundos. Sin embargo, en el despacho ministerial el rumbo está fijado: el despliegue de una renovada Dirección Nacional de Policía Comunitaria y una acción policial inteligente serán las armas tácticas inmediatas. El gran enroque policial

uruguayo ya está en marcha, y la ciudadanía aguarda el veredicto en las calles.

EL PLAN «MÁS BARRIO» El cambio de autoridades responde a la urgencia de contener los intensos tiroteos y disputas criminales que azotan a diversos barrios de Montevideo. La estrategia del Ministerio del Interior se apoya en dos grandes pilares operacionales:

Intervención territorial focalizada: El plan «Más Barrio» busca recuperar la presencia del Estado en zonas críticas mediante una acción policial inteligente, la saturación táctica y el despliegue de patrullajes coordinados.

Tecnología y prevención: Se prioriza la optimización de recursos tecnológicos (como el monitoreo por cámaras) combinada con el fortalecimiento de la atención directa en las comisarías de cercanía.

Combate a la corrupción: La remoción del mando también estuvo motivada por la necesidad de abordar con firmeza investigaciones de corrupción interna, particularmente en las dependencias de la Zona 4 de la capital.

LA REACCIÓN EN BLOQUE DE LA OPOSICIÓN El masivo recambio ordenado por el Ministerio del Interior generó duras críticas. La oposición centró sus cuestionamientos directamente sobre la conducción política, librando de culpa al cuerpo técnico policial.

El senador del Partido Nacional, Javier García, lideró las declaraciones apuntando contra la máxima autoridad civil del ministerio. Sostuvo que señalar a los policías como únicos responsables es una «fuga de responsabilidad política y personal». Para García, el problema no radica en el despliegue táctico, sino en la falta de mando por parte de la secretaría de Estado.

MONTEVIDEO COMO «ZONA DE GUERRA» Desde filas del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda calificó la rotación como una «confesión del fracaso» frente a la crisis delictiva. Ojeda cuestionó que se apliquen movimientos de nombres sin presentar cambios sustantivos de gestión de fondo. Afirmó públicamente que varias zonas de la capital uruguayo se han transformado en «verdaderas zonas de guerra narco a cielo abierto». Debido a esto, exigió que la seguridad pase a ser la prioridad del gobierno bajo una nueva «estrategia antinarco» de saturación violenta. A esto se suma que los ecos de la interpelación de Bordaberry sobre la seguridad pública siguen resonando en la interna del palacio legislativo.

EL FANTASMA DE LA INTERNA El exministro del Interior Nicolás Martinelli sumó fuertes declaraciones que desnudaron un supuesto desgaste en la interna ministerial. Martinelli señaló una crisis de conducción insostenible. Según el exjerarca, la convivencia entre el Director de la Policía Nacional y el ascendido Alfredo Clavijo terminó derivando en una disputa permanente por el poder, protagonismo e influencias, condicionando el trabajo cotidiano de la tropa.



Zósimo NOGUEIRA
Comisario General (r)

Que falta de respeto, que atropello a la razón, la jerarquía y estructura policial es piramidal. Como es posible este sube y baja. Hoy arriba, mañana abajo; u hoy abajo y al siguiente día arriba. Los recientes cambios en mandos policiales marcan un desorden jerárquico que a nuestro juicio menoscaba a la institución policial. Por un lado, se la elogia y pondera; por otro se debilitan cimientos que hacen al profesionalismo y al proyecto de vida de sus integrantes. Es cierto que la ley no exige jerarquías policiales para designar a sus jefes de Policía, solo se requiere que sea de la confianza del presidente de la República.

Si fue policía y tuvo un rango bajo no importa; lo mismo si nunca estuvo vinculado a la función policial y se dedico a otras actividades.



Pero esto que se ha hecho afecta la interna de la institución y la ética profesional, pues los involucrados son todos egresados de la misma Escuela Nacional de Policía.

Dice el ministro del Interior Dr. Carlos Negro que tras una evaluación de gestión y perfil realiza esta reestructura para cumplir con las expectativas del presidente de la República en materia de seguridad.

Que se va a reforzar patrullaje, tecnología y personal policial.

«Vamos a seguir empujando para recuperar y ganar las esquinas y calles del país como toda la ciudadanía lo reclama»

«Los cambios serán una mejora sustantiva en lo que refiere a la seguridad de la población»

Dice de reasignar, reorganizar y poner a los mejores de acuerdo con sus perfiles, en lugares donde se necesita.

Habrán más cambios pues los nuevos jefes querrán armar sus equipos.

De planes y selección de personal no hablemos, o no se dice la verdad o no hay una explicación razonable.

Solo se reitera una aceptación de fracaso. No ha habido ninguna idea o estrategia innovadora.

LOS CAMBIOS. Mucha desprolijidad, no evaluamos capacidades de los jerarcas afectados, tampoco somos afectos para coleccionar ni a distinguir por pins e insignias en el pecho o solapa del uniforme. Lucir como árbol de navidad no los hace mejores solo más visibles. Preferimos la sobriedad.

El Subdirector de la Policía Nacional Crio General Alfredo I. Clavijo Araujo fue cesado en su cargo y designado jefe de Policía de Montevideo, cargo que aceptó. Razonemos.

Esta en actividad, por lo tanto, encuadrado Jerárquicamente y obligado a aceptar ordenes. Tampoco cumple con edad y tiempo de permanencia que sumados alcancen el cómputo necesario para el haber de retiro.

Es egresado de la Escuela Nacional de Policía integrando la promoción Inspector General (r) Ubaldo Genta periodo 1997-1999.

Hizo una carrera meteórica y desempeño altos cargos en las anteriores administraciones frenteamplistas; siendo muy joven fue Director de la Guardia Republicana la Institución policial con mayor poder de fuego y formación cuasi militar.

Durante la Presidencia del Dr. Luis Lacalle Pou paso en comisión a la Intendencia de Montevideo. (Por pedido de autoridades del F.A.). Vuelto al gobierno el F.A.

POBRE POLICIA MIA Desorden de charreteras

fue designado Sub-director nacional de la Policía, pasó a lucir Charreteras con 3 estrellas, distinción propia de la segunda Jerarquía policial de todo el país. Hoy; fue cesado en ese cargo y designado como jefe de Policía de Montevideo. Cargo con rango Departamental. Bajó su jerarquía.

Que charreteras usará, mantendrá las tres estrellas o se sacará alguna. En su lugar fue designado el Comisario General (r) Julio Sena hasta ayer subalterno.

¿Cómo se maneja esta relación desde el punto de vista jerárquico y disciplinario? Un ascenso y un descenso en la misma escala jerárquica.

Ayer Clavijo le daba órdenes a Sena, hoy Sena se las da a Clavijo y debe acatar pues orgánicamente paso de superior a subordinado.

El jefe Policía de Montevideo «cesado» Crio General (r) Pablo Lotito, hace poco tiempo había comenzado a retirar a los «ocupas-invasivos» que hacían campamentos, y armaban residencia donde fuere.

Tarea muy bien vista por la comunidad, que a poco de iniciada y sin explicación dejo de hacerse.

No considero sea su culpa el incremento de violencia y muerte en el territorio, las responsabilidades están muy diversificadas.

Tiene varias patas. La disolución de unidades y la creación de otras no dieron el resultado esperado.

La selección de personal, la carrera, la disciplina y el tutelaje del superior al subalterno no cumplen con las expectativas ni logran una mejor gestión policial. Esas reformas a nivel policía fueron implementadas por el FA y no modificadas durante la Presidencia del Dr. Luis Lacalle Pou y sus ministros del Interior.

«Está claro, que muchos de los cambios fueron realizados buscando armonizar con el actual sistema procesal penal y leyes supuestamente igualitarias traídas del contexto internacional, pero muy cuestionadas por tendencias opositoras». Si desde el Ministerio o la Dirección Nacional de Policía no estaban conformes con la performance de Lotito, por estrategia, gestión o resultados lo podían solucionar impartiendo órdenes y disponiendo los apoyos y reemplazos necesarios. La Policía es una institución jerárquica.

Se ha demorado mucho, van 15 meses de iniciada esta administración.

Lo que va a hacer Clavijo ahora lo podía hacer desde el cargo que ocupaba.

Evaluado el desempeño del Crio Gral (r) Pablo Lotito no fue malo; pero su perfil no encaja en lo que quiere el Ejecutivo para Montevideo; ahora se lo designa en otro cargo de particular confianza como director nacional de Investigaciones.

Un área muy sensible. Otra ambigüedad.

Se releva a la directora de la Guardia Republicana, la unidad más poderosa de la Policía Nacional.

Se trata de la Comisario General Angelina Ferreyra quien está en actividad.

No se le asigna destino y en su reemplazo se designa a un Comisario Mayor Fabián Monzón.

Seguramente será un oficial muy capaz y de la confianza del ministro y de la Dirección Nacional de la Policía Nacional, del Comisario General (r) José Manuel Azambuya .

Pregunta. Con tantos Comisarios Generales ninguno es de confianza ni se lo considera con las capacidades para ocupar ese cargo.

Porque seguir lastimando a nuestra querida institución Policía.

Me extraña con que docilidad y naturalidad oficiales superiores en condición de retirados aceptan ceses y destinos.

Los cargos de particular confianza no son cargos de carrera, son cargos políticos y así lo deben entender. Significan compromiso con un proyecto político.

Veo una caída del profesionalismo de la carrera policial y baja valoración por «parte» del sistema político de los rangos jerárquicos policiales.

Se pasa a considerar a esta profesión como un empleo, y a sus integrantes como simples asalariados.

Me duele y me rebelo. Cuanta lucha hubo desde tiempos inmemoriales para dignificar esta noble profesión. Artigas se dice, primer Comisario del Cordón. Los blandengues hacían de policía de campaña.

Ya se ve lejano el comienzo de profesionalizar la carrera policial con iconos como Juan Carlos Gómez Folle y aquellos oficiales que lucharon y aportaron experiencias y saber para elaborar la primera Ley Orgánica Policial.

Muchas gracias presidente de la República Jorge Pacheco Areco propulsor y firmante de tan anhelada ley. Ley Orgánica Policial Nro. 13963 del 22 de mayo de 1971.

Que estos desprolijos cambios no erosionen la interna de la Institución y se logre el fin perseguido de mejor y más seguridad pública.

La vergonzosa salida fácil

Hay decisiones de gobierno que, más que resolver un problema, buscan administrar la responsabilidad por ese problema. Los recientes cambios dispuestos en la cúpula policial parecen encuadrarse precisamente en esa categoría.

Desde el oficialismo se presentan como una señal de reacción ante el deterioro de los indicadores de seguridad y la creciente preocupación ciudadana por la violencia que vuelve a instalarse en las calles del país. Sin embargo, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿cambiar algunos nombres dentro de la estructura policial modifica las causas políticas que están detrás de la situación actual? La seguridad pública es, por definición, una responsabilidad política. Las policías ejecutan, pero las orientaciones estratégicas, los mensajes institucionales, las prioridades y el respaldo político corresponden al gobierno. Por eso resulta



difícil aceptar que, frente a una realidad que se ha agravado desde el cambio de administración, la principal respuesta consista en mover piezas dentro de la estructura operativa mientras quienes conducen políticamente el área permanecen indemnes frente a cualquier cuestionamiento.

Además, resulta injusto que las consecuencias de una crisis de seguridad terminen recayendo sobre hombres y mujeres que han dedicado décadas enteras al servicio policial. Más allá de las legítimas diferencias que puedan existir respecto de determinadas decisiones de gestión, muchos de los jerarcas desplazados poseen trayectorias profesionales extensas, reconocidas y construidas a partir de años de experiencia, sacrificio y vocación de servicio. Se trata de funcionarios que han desarrollado carreras completas dentro de la institución, enfrentando algunas de las etapas más complejas que ha vivido el país en materia de seguridad pública.

Nadie llega a posiciones de máxima responsabilidad dentro de la Policía Nacional por casualidad. Detrás de esos nombramientos existen años de preparación, conducción de equipos, gestión operativa y exposición permanente a escenarios de enorme complejidad. Son profesionales cuya capacidad técnica ha sido reconocida por gobiernos de distintos signos políticos y cuya dedicación al servicio público difícilmente pueda ser puesta en duda.

Da la impresión de que se intenta trasladar hacia algunos mandos policiales una responsabilidad que en realidad corresponde a quienes diseñan y conducen la política de seguridad. Sin señalar personas concretas ni atribuir intenciones individuales, el mensaje que recibe la ciudadanía es que el problema estaría en quienes ejecutan y no en quienes dirigen. Es una explicación cómoda, pero insuficiente. Más aún cuando existe una percepción ampliamente extendida en distintos ámbitos vinculados a la seguridad de que la Policía Nacional no se siente respaldada por las actuales autoridades políticas. En una tarea tan delicada como el combate al delito, el respaldo institucional no es un elemento accesorio: constituye una condición esencial para que quienes deben actuar lo

Guzmán A. IFRAN
 Contador Público. Fue diputado por Montevideo y Coordinador de la Opp



hagan con firmeza, convicción y confianza. Cuando ese respaldo se percibe como débil o ambiguo, inevitablemente se resiente la capacidad operativa del sistema.

La experiencia reciente del país demuestra precisamente lo contrario. Durante el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, la señal política hacia la Policía fue clara y consistente. Se podrá discrepar con decisiones específicas, como corresponde en democracia, pero difícilmente pueda discutirse que existió una voluntad explícita de fortalecer a la institución policial y respaldar su accionar dentro del marco de la ley. Esa diferencia de enfoque no es menor. Las instituciones también funcionan en función de las señales que reciben de quienes las conducen.

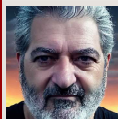
Por otra parte, estos acontecimientos vuelven a poner sobre la mesa una discusión más profunda. El Frente Amplio gobierna legítimamente porque así



lo decidió la ciudadanía y ese mandato democrático merece absoluto respeto. Pero la legitimidad electoral no elimina la obligación de rendir cuentas por los resultados. Y cuando los resultados en materia de seguridad comienzan a deteriorarse, corresponde asumir las responsabilidades políticas correspondientes en lugar de buscar explicaciones exclusivamente administrativas u operativas.

La historia reciente tampoco ayuda al oficialismo. Durante los quince años anteriores de gobiernos frenteamplistas, Uruguay atravesó un período de fuerte expansión económica impulsado en buena medida por un contexto internacional excepcionalmente favorable. Sin embargo, aun en aquel escenario de prosperidad, la seguridad pública se consolidó como una de las principales preocupaciones ciudadanas. Los problemas estructurales ya estaban allí. Las dificultades para contener el avance del delito ya estaban allí. Y muchas de las discusiones que hoy vuelven a ocupar la agenda pública son, en realidad, viejos debates que nunca llegaron a resolverse.

Por eso los recientes cambios policiales generan más interrogantes que certezas. Porque si el problema es político, la solución también debe ser política. Y porque cuando una administración busca responsables hacia abajo antes de revisar sus propias decisiones, corre el riesgo de convertir a servidores públicos de trayectoria intachable, reconocida capacidad profesional y auténtica vocación de servicio en simples chivos expiatorios de errores que nacen mucho más arriba.



Eduardo IRIGOYEN GARCÍA

Fraybentino, periodista, sobreviviente de la zurda del Partido Colorado, reivindicador del anarcobattlismo, liberal extremista, republicano radical, defensor de la laicidad, gris onettiano, admirador del rock progresivo.

Esperando la carroza (de la rebelión que no llega)

Hay algo que me hace gracia, y no porque el asunto no sea serio, sino porque la política uruguaya, aunque es muy seria, a veces tiene algo de sainete. La derecha más dura y los libertarios parecen convencidos de que el desgaste del gobierno de Orsi, por la telenovela de la camioneta, será el fin del Frente Amplio y el comienzo de una gran rebelión popular. Como si en cualquier momento las masas enfurecidas comenzaran a bajar de las cuchillas o ganar las calles para pedir la cabeza del gobierno. El episodio, sin duda, golpeó muy fuerte al Frente Amplio y obligó a Orsi a pedir disculpas (que pocos creyeron), intentar explicar la compra (fue peor) y terminar donando el vehículo a la ANEP.

Cuando hay que quedar bien con la sociedad y mejorar tu imagen, hacé una donación a la ANEP, a un CAIF o a una escuela rural. El tema sigue dando vueltas y generando ruido político.

dentro del propio oficialismo hay molestia, hay bronca y desconcierto. Pero eso no significa que sus votantes vayan a salir corriendo hacia la Coalición Republicana (que en los hechos está, pero todavía no existe).

Porque el Frente Amplio tiene algo que muchos adversarios siguen sin comprender: para muchos fieles, es una identidad, casi una pertenencia emocional. Y eso no se rompe porque aparezca un escándalo o porque un presidente compre una camioneta con descuento y eso se presente envuelto en confusión y declaraciones poco creíbles.

Tampoco la ciudadanía parece demasiado convencida por las alternativas más duras.

Los libertarios se presentan como los nuevos, los antisistema, los que vienen a terminar con la partidocracia. Son los que meten en la misma bolsa al Frente Amplio, blancos y colorados, como si fueran tres versiones estatistas y medio zurditas, mezclados en el mismo guiso.

Hablan con entusiasmo de Milei, de Trump, de la batalla cultural y de la casta. Pero la pregunta es sencilla:

¿Hay espacio para ellos?



Pero una cosa es el desgaste y otra muy distinta creer que el país está a las puertas de una especie de revolución liberal-conservadora-libertaria.

En Montevideo ya hubo varias convocatorias de youtubers, libertarios y grupos que se presentan como «antisistema». Prometieron puebladas en Plaza Independencia y Plaza de la Bandera. Redes sociales encendidas, mensajes épicos, anuncios de que «ahora sí despertó Uruguay».

Después llega la hora señalada y aparecen cuatro gatos locos, dos cámaras y algún periodista aburrido.

Ahora son los camioneros quienes hicieron una protesta. Se juntaron al costado de la ruta, quemaron algunas cubiertas y expresaron una bronca legítima o no, eso es otra discusión. No voy a entrar en el contenido del reclamo porque me interesa señalar otra cosa.

La esperanza de buena parte de la oposición más dura es que el combate contra el Frente Amplio empiece desde el interior, desde el campo al que ven como la reserva moral, ese Uruguay profundo que muchos imaginan como el reverso perfecto de Montevideo, o sea, un país conservador, tradicional y naturalmente enemigo de la izquierda.

Pero la realidad uruguaya es bastante más compleja.

Pepe Mujica y el MPP entendieron eso hace años.

Fueron vivos.

Se metieron en un territorio que les era hostil y terminaron siendo abrazados, incluso por empresarios y productores rurales. Más de uno que votó a los blancos toda la vida, hablaba de Mujica con respeto, y algunos hasta con afecto, al punto tal que lo votaron.

Una rareza para quienes siguen creyendo que el Uruguay se divide entre Montevideo «socialista» y el Interior «blanco-coalicionista». El Frente Amplio está golpeado. Machucado. El caso de la camioneta le hizo mucho daño y

Por ahora, ese nicho antisistema tiene dueño: se llama Gustavo Salle. Y da la impresión de que Eduardo Lust está trabajando para volver al Parlamento con sus propios votos. El resto sigue muy fuerte en las redes sociales, pero bastante más débil cuando llega la hora de contar gente real y no virtual.

No es bueno el triunfalismo. Ni de un lado ni del otro.

Falta muchísimo para las próximas elecciones.

El Frente Amplio sigue siendo la fuerza política más numerosa del país y tiene una virtud que blancos y colorados conocen demasiado bien: hace de la unidad una religión.

Los opositores más entusiasmados creen que la elección de 2029 va a ser un paseo para Lacalle Pou y ganará con la fusta bajo el brazo.

Mientras tanto, los dirigentes colorados y blancos más experimentados, por convicción republicana o por viveza criolla, recomiendan calma.

Ya está, suficiente, no le peguen más. El presidente está en el suelo, dejen de patear al caído.

(«¡No me peguen, soy Orsi!»).

Las elecciones no se ganan ahora en junio de 2026, ni en un vivo por Instagram o YouTube.

Muchas veces la política uruguaya tiene la desagradable costumbre de definirse cuando parece que ya está todo resuelto.

Conviene recordar la final de la Libertadores de 1987. Con el empate, Peñarol estaba prácticamente vencido. América de Cali ya acariciaba la copa y en el minuto 120 apareció la Fiera Aguirre y cambió toda la historia.

En política también pasa.

Por eso conviene desconfiar de quienes están descorchando champagne y ya mandaron comprar el cajón.





Pablo CAFFARELLI
Abogado, Escribano. Escritor

Uruguay mundial

Cada vez que rueda una pelota en un Mundial, Uruguay vuelve a encontrarse con su propia historia. No es una historia cualquiera. Es la de un país pequeño, enclavado entre dos gigantes, que alguna vez decidió comportarse como un ejemplo.

El Mundial nació en 1930 y nació aquí. No fue un regalo ni una concesión. Uruguay había conquistado los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928, que la propia FIFA reconocía como campeonatos mundiales de la época. Éramos campeones del mundo antes de que existiera la Copa del Mundo. Y cuando llegó la hora de organizar el primer torneo, el país asumió un desafío que hoy parece imposible: construir un estadio monumental en pocos meses para recibir a las selecciones del planeta.



Se hizo. Con trabajo, decisión política y una noción de grandeza que hoy parece extraviada. Así nació el Estadio Centenario, monumento vivo de los cien años de nuestra primera Constitución. Mientras el mundo atravesaba la crisis económica más profunda de su tiempo, Uruguay levantaba una obra emblemática y, de paso, ganaba el campeonato derrotando a la Argentina en la final.

Aquella generación no se limitó a competir. Construyó y venció. Hizo infraestructura y escribió historia. Veinte años después llegaría el Maracanazo, acaso la mayor hazaña deportiva de todos los tiempos. Por eso cuatro estrellas iluminan nuestro escudo. Cuatro. No dos. Y lo hacen con pleno reconocimiento de la FIFA, pese a las periódicas discusiones de quienes desconocen la historia o simplemente no la toleran.

Esas estrellas representan algo más que triunfos deportivos. Son el reflejo de una forma de ser. Del Uruguay audaz, inconformista, batallador. Del país que entendía que la grandeza no dependía del tamaño sino de la voluntad. La pregunta que hoy me hago es qué ocurrió después.

Porque mientras admiramos las glorias del pasado, cuesta encontrar en el presente obras que despierten el mismo orgullo colectivo. El Estado crece, el gasto aumenta, las estructuras burocráticas se multiplican, pero los resultados parecen cada vez más modestos. Proyectos millonarios terminan convertidos en monumentos al despilfarro. Reformas necesarias quedan atrapadas durante años entre expedientes, corporativismos y discusiones interminables.

Montevideo es quizá el ejemplo más visible. El tránsito se deteriora año tras año. Trasladarse por la ciudad consume tiempo, productividad y paciencia. Las soluciones existen, los diagnósticos abundan, pero la ejecución siempre parece perderse en algún escritorio.

Sin embargo, cada Mundial vuelve a recordarnos algo esencial. Cuando la selección entra a la cancha, reaparece ese viejo ADN uruguayo. El que nos llevó al cuarto puesto en Sudáfrica 2010, a conquistar la Copa América en Argentina en 2011 y a competir de igual a igual contra países que nos superan ampliamente en población y recursos.

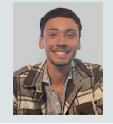
Tal vez por eso el fútbol emociona tanto. Porque nos recuerda lo que fuimos capaces de hacer cuando nos propusimos objetivos ambiciosos. Porque funciona como un espejo entre la determinación que mostramos en la cancha y las resignaciones que aceptamos fuera de ella.

Uruguay tiene condiciones extraordinarias para transformarse en un centro logístico, tecnológico y financiero de referencia regional. Tiene estabilidad institucional, talento humano y ubicación estratégica. Lo que falta no es capacidad. Lo que falta es decisión.

En estos días de Mundial volveremos a soñar con victorias imposibles. Ojalá que esa energía no termine cuando suene el pitazo final. Ojalá que el espíritu que levantó el Centenario en tiempo récord y silenció al Maracanazo vuelva a contagiar también a la política, a la gestión y a la construcción del país que viene.

Porque la historia ya demostró que Uruguay puede hacer cosas extraordinarias. Solo necesita volver a creerlo.

¡Uruguay nomá!



Ramiro Rossi
Integrante del CED del PC de Salto

Competitividad y costo de vida: Oddone toma el timón

Cuando el youtuber italiano Zazza, acostumbrado a recorrer algunos de los barrios más peligrosos del mundo, vino a Uruguay y visitó lugares como Cerro Norte, no fue la inseguridad lo que lo asustó, fueron los precios de los supermercados.

«Me he afeitado con jabón para no gastar tanto», dijo entre bromas mientras intentaba entender cómo alguien que gana US\$ 500 por mes puede llegar a fin de mes en Uruguay. Y la realidad es que no descubrió nada nuevo.

Desde hace años convivimos con uno de los costos de vida más altos de la región. Lo comprobamos cada vez que vamos al supermercado, compramos productos de higiene o comparamos precios con los países vecinos. La sorpresa de Zazza es la misma que se lleva cualquier extranjero que pisa Uruguay por primera vez.

Por eso resulta positivo que, después de tanto tiempo, vuelva a instalarse en la agenda pública el debate sobre la competitividad y el costo de vida.

Durante años abundaron los diagnósticos. Economistas, empresarios, centros de estudio y analistas explicaron una y otra vez por qué Uruguay es caro. Recuerdo haber asistido junto a un amigo a una presentación sobre el tema. Al salir comentábamos exactamente lo mismo: siempre terminamos escuchando nuevas explicaciones sobre problemas que ya conocemos.

La pregunta es otra: ¿vamos a seguir acumulando diagnósticos o vamos a empezar a discutir soluciones?

Por eso es una buena noticia que el Ministerio de Economía haya presentado una iniciativa vinculada a este tema. No porque una ley vaya a resolver de golpe el costo de vida, sino porque al menos empieza a discutirse cómo atacar algunos de sus causas.

Y una de las cosas más interesantes de la presentación fue que junto al ministro Gabriel Oddone estaba también Cristina Lustemberg, ministra de Salud. ¿Por qué es relevante? Porque detrás de los precios altos no hay solamente impuestos.

Existe la idea de que Uruguay es caro únicamente por la carga tributaria, pero también existen regulaciones y trámites que limitan la competencia y terminan trasladándose al precio que pagan los consumidores.

Las multinacionales ya producen con estándares de calidad que les permiten comercializar sus productos en decenas de países. Sin embargo, cuando alguien quiere importar esos mismos productos a Uruguay, el LATU y el MSP exigen volver a realizar trámites, registros y controles que muchas veces ya fueron efectuados en otros mercados. Todo eso tiene un costo y termina encareciendo los productos.

Pero la pregunta es: ¿esos requisitos realmente cumplen la función que prometen? El caso de la pasta de dientes retirada del mercado brasileño en 2025 por efectos adversos plantea dudas razonables. Ese producto también se comercializaba en Uruguay. Si se supone que pagamos más caro porque existen organismos que verifican y controlan cada producto, ¿cómo es posible que Brasil detectara el problema antes que nosotros?

Lo más preocupante es que el MSP demoró varios meses en actuar después de que Brasil ya había retirado el producto. Es decir, soportamos mayores costos regulatorios y, aun así, la respuesta llegó tarde.

Algo similar ocurre con la competencia entre importadores. Muchas veces se señala a los supermercados como responsables de los precios altos, pero el verdadero cuello de botella suele encontrarse antes. Los márgenes elevados de algunos importadores pueden mantenerse precisamente porque los requisitos para ingresar al mercado son costosos, lentos y complejos. Cuando resulta difícil que aparezcan nuevos competidores, los precios tienden a mantenerse altos. Los ejemplos de la región muestran que cuando aumenta la competencia los precios pueden bajar significativamente. En Argentina, tras la apertura a productos importados impulsada en 2024, el precio de las cápsulas de café cayó cerca de un 35%. Mientras tanto, en Uruguay sigue siendo habitual que muchas personas crucen la frontera para comprar productos básicos a precios considerablemente más bajos. Existe un viejo dicho en la filosofía china que sostiene que Occidente suele preocuparse demasiado por los procesos y demasiado poco por los resultados. Sería una ironía que una ley pensada para mejorar la competitividad terminara atrapada durante años en trámites, discusiones y demoras. El diagnóstico ya lo conocemos. La pregunta ahora es si finalmente vamos a empezar a discutir las soluciones.



Durmiendo con el enemigo

Cada partido político tiene derecho a procesar sus diferencias internas, a resolver sus tensiones y debatir sobre sus contrariedades de la forma que crea conveniente. El problema es cuando esas disputas internas dejan de ser un asunto partidario para convertirse en un problema de gobierno. Cuando las contradicciones, los mensajes cruzados, las confusiones, los errores, las mentiras y los grandes problemas de comunicación terminan afectando la gestión, frenando decisiones importantes y erosionando la confianza pública. Aquí el problema ya no impacta solo a una colectividad política, sino que recae y termina perjudicando, como sucede ahora, a todo un país.

El gobierno sumergido en el caos interno y al no saber cómo salir de ese gran berenjenal en el que ellos solitos se enterraron recurren a lo más fácil: echarle la culpa a la oposición. Salieron varios legisladores como desesperados hablando de: «una operación política opositora que intenta desprestigiar al presidente e inventar una crisis en la interna del Frente Amplio».



No es así.

El principal adversario del Frente Amplio es el propio Frente Amplio.

Lo que desprestigia al gobierno son los errores del propio gobierno.

Lo que desestabiliza y erosiona la institución presidencial son las actitudes del propio presidente Orsi.

Ni que hablar de las mamarrachas declaraciones de los voceros del gobierno que en vez de dar luz a los temas lo enturbian más.

Lo peor que le puede pasar a un gobierno es generar por sus acciones, inacciones y de fuertes diferencias entre ellos. Terminando en varias renunciaciones forzadas, es difícil de revertir.

La ciudadanía votó un gobierno para que lidere una propuesta, marque un rumbo, tome decisiones y cumpla con sus promesas de campaña. Y acá no hay propuesta, no hay rumbo, no se toman decisiones claras y como afirma su propia militancia no se cumple con las promesas. La sensación que tenemos la mayoría de la ciudadanía es que el oficialismo está atrapado en sus indecisiones permanentes, en discusiones insólitas, donde una declaración se contradice con otra. Donde ellos mismos unos a otros se desautorizan en forma permanente. Ya desde el puntapié inicial, el gobierno se transformó en un verdadero escándalo mediático. Fueron los propios frenteamplistas que comenzaron a dinamitar la credibilidad de su gobierno en una serie interminable de gruesas irregularidades y de fuertes diferencias entre ellos. Terminando en varias renunciaciones forzadas. Lo de la ex ministra de vivienda, del ex presidente de colonización, de la vicepresidenta de ANP, de la directora general de secretaría del Ministerio de Medio Ambiente, de la directora de Biodiversidad, del director Nacional de Artesanías.

Sumemos a esto el escándalo de Danza en ASSE. La renuncia en masa de 11 de los 13 integrantes de la Comisión Honoraria de Salud por estar en desacuerdo

Daniel MANDURÉ
Convencional del PC. Fue Edil por Montevideo



con el gravísimo error de la ministra Lustemberg al reducir la inhabilitación de una anestesista involucrada en el fallecimiento de una paciente.

Ni que hablar del triste espectáculo que ellos crearon en torno al turbio manejo de la camioneta de alta gama del presidente de la república.

Todos los días un lío nuevo, no dan respiro. Todo eso y mucho más en apenas 14 meses de gobierno. ¿Qué culpa tiene la oposición de ese caos interno?

¿Qué tiene que ver la oposición con la filtración de los audios que trascendieron de Collette Spinetti? Con críticas durísimas y discriminadoras hacia el ministro y subsecretario del Mides.

¿Qué tiene que ver la oposición con los desacuerdos internos entre autoridades del gobierno en si hacer o no un túnel por 18 de Julio? Lo cierto que hoy el proyecto final está en la dulce espera y nadie sabe cuál va a ser.

¿Qué responsabilidad tiene la oposición que hayan trascendido públicamente las duras críticas del ex presidente del Frente Amplio y exsenador Rafael Michehlini hacia la gestión del Mides?

Que la ministra Cardona diga una cosa opuesta a lo que dice Oddone en cuanto a la quita de beneficios impositivos a los autos eléctricos, ¿es responsabilidad de sectores opositores?

¿O que el ministro de educación y autoridades de la Biblioteca Nacional hayan anunciado con bombos y platillos que había disponibles 30 millones de dólares para reformar la biblioteca y al otro día el ministro de economía y el director de la OPP lo hayan desmentido?

Que hayan discutido entre ellos por la participación del presidente en la visita del portaviones de E.E. U.U. ¿es culpa de la oposición?

¿Que quedaran todos desconcertados en la interna por la propuesta del secretario de presidencia Pacha Sánchez, vinculada a que pequeños ahorristas puedan invertir en proyectos de las empresas del Estado?

¿O que Carolina Cosse quiera utilizar los menguados recursos en construir un nuevo edificio anexo para los legisladores?

¿O que los sectores sindicales y políticos estén «con la sangre en el ojo» con el propio gobierno por una rendición de cuentas con gasto cero?

¿Qué culpa tiene el adversario político de que Castillo este de acuerdo con la aplicación del impuesto del 1% a los más ricos y Oddone se ponga?

¿Acaso han sido legisladores de la oposición los que le dieron manija al referente frenteamplista Esteban Valenti para que le pegue a todo lo que se mueve, reclamando cambios profundos en el rumbo del gobierno?

¿Fue la oposición que le dio letra a Gil Iribarne para que haya salido a declarar que la JUTEP está totalmente desprestigiada?

Los militantes de base y sindicatos han expresado su gran desilusión con la marcha del gobierno, cuestionando incluso lo sesgado del denominado «diálogo social».

El sector «Casa Grande» de Constanza Moreira ha calificado al gobierno como conservador, el peor insulto para alguien que como el Frente Amplio ha hecho gárgaras con el progresismo

Cuando los legisladores deben juntarse con el presidente para emitir una declaración de respaldo al presidente y que a su vez el presidente deba transmitir el respaldo a su gabinete es una clara señal de todo lo contrario. Nada bueno está pasando.

Como cuando en el fútbol se reúne la directiva de una institución y elabora una declaración de respaldo a un técnico, todos sabemos que algo no anda bien.

Por eso cuando escuchamos a dirigentes frenteamplistas decir que «hay un complot de la oposición en contra del gobierno y del Frente Amplio, nos causa mucha gracia.

Uruguay no necesita conflictos conventilleros de cuarta necesita un gobierno donde todos sus actores estén comprometidos en la gestión, que comunique con transparencia sus decisiones, que se haga cargo de sus promesas de campaña y que sepa con honestidad aceptar errores y no intentar maquillarlos con declaraciones ridículas.

Las diferencias internas son legítimas, suceden en todos los partidos, lo que no es legítimo ni se puede permitir en un partido que gobierna es terminar convirtiéndose en el principal obstáculo del avance del país, de desgaste permanente de la confianza. Nunca las disputas partidarias pueden ocupar más tiempo que las soluciones para el país.

El principal obstáculo del gobierno estas puertas adentro.

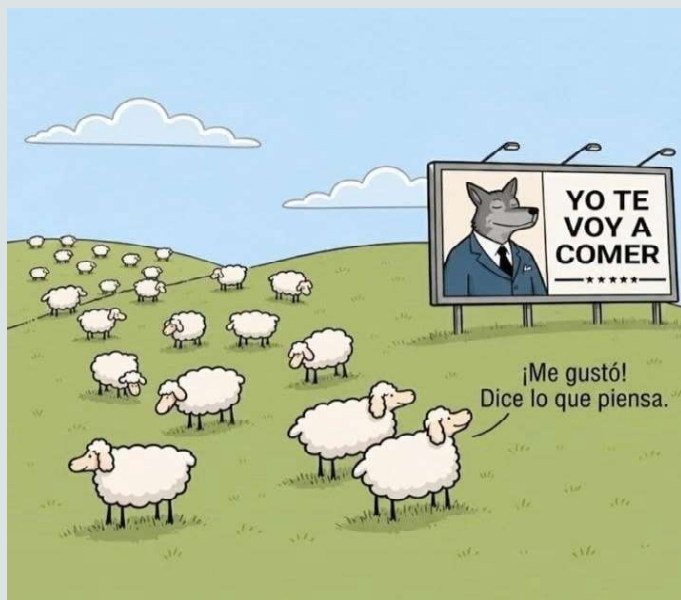
Conviven en la misma habitación, comparten la misma cama, se tapan con la misma frazada y parecen no darse cuenta de que terminan acostados y durmiendo con el enemigo. Ellos son su propio enemigo.



Ricardo ACOSTA CALVO
Periodista

La camioneta fue apenas la excusa. Lo verdaderamente interesante fue observar cómo muchos dejaron de discutir los hechos para concentrarse en las intenciones, las simpatías o la personalidad de sus protagonistas. Cuando eso ocurre, la política deja de ser un ejercicio de razón y empieza a parecerse a un acto de fe. La imagen es sencilla. Un lobo aparece en un cartel anunciando exactamente lo que piensa hacer. No engaña a nadie. No oculta sus intenciones. No disimula. El aplauso de las ovejas «Yo te voy a comer», dice con absoluta claridad. Y una oveja, admirada, responde: «Me gustó. Dice lo que piensa».

La escena provoca una sonrisa inmediata. Pero también una inquietud. Porque detrás del humor se esconde una de las características más preocupantes de la política contemporánea.



La creciente tendencia a valorar más la sinceridad que el contenido. Más la autenticidad que las consecuencias. Más la forma que el fondo. Durante las últimas semanas Uruguay discutió intensamente alrededor de la camioneta adquirida por el presidente Yamandú Orsi, el descuento recibido, las explicaciones posteriores, las contradicciones, la intervención de la JUTEP y finalmente la donación del vehículo a la ANEP. Mucho se dijo sobre los aspectos jurídicos. Mucho se discutió sobre los aspectos éticos. Y seguramente los organismos competentes terminarán estableciendo si existió o no alguna irregularidad. Pero quizás la enseñanza más interesante de toda esta historia se encuentre en otro lugar. En la reacción de muchos ciudadanos. Porque una parte importante de la defensa pública del presidente no se construyó sobre documentos, normas o explicaciones técnicas. Se construyó sobre una idea mucho más simple. «Al menos dio la cara.» «Al menos fue sincero.» «Al menos explicó.» La sinceridad pasó a ocupar el centro de la discusión. Como si la honestidad comunicacional fuera suficiente para resolver cualquier cuestionamiento político. Sin embargo, la democracia exige algo más. Mucho más. Un gobernante no es evaluado únicamente por lo que dice.

El aplauso de las ovejas

Es evaluado por lo que hace. Por las decisiones que toma. Por los símbolos que proyecta.

Por las señales que envía.

Por la coherencia entre sus discursos y sus actos.

La sinceridad es una virtud. Pero nunca fue una excusa.

Un político puede explicar perfectamente una mala decisión.

Puede comunicar con absoluta transparencia un error.

Puede incluso reconocer una equivocación.

Y aun así seguir siendo responsable de ella.

La historia está llena de dirigentes que dijeron exactamente lo que pensaban.

Eso nunca los convirtió automáticamente en buenos gobernantes.

Tampoco en personas admirables.

Porque la sinceridad no transforma una mala decisión en una buena decisión.

Ni convierte una conducta cuestionable en una conducta correcta.

La sinceridad simplemente elimina una capa de hipocresía.

Nada más.

Sin embargo, vivimos tiempos donde parece haberse instalado una peligrosa fascinación por los liderazgos «auténticos».

Líderes que hablan sin filtros. Que dicen lo que sienten. Que desprecian las formas. Que convierten cada intervención pública en una demostración de espontaneidad.

Y muchas veces terminamos admirando esa actitud sin detenernos a analizar qué es exactamente lo que están diciendo o haciendo.

Como la oveja del dibujo.

Fascinada por la franqueza del lobo. Indiferente a las consecuencias.

La política uruguaya tampoco está inmune a ese fenómeno.

Lo vemos en todos los partidos.

En dirigentes de izquierda, de derecha y de centro.

En militantes. En periodistas. En ciudadanos comunes.

Cada vez resulta más frecuente que los hechos sean evaluados según quién los protagoniza y no según su contenido.

Si lo hace uno de los nuestros, buscamos explicaciones. Si lo hace uno de los otros, exigimos condenas.

La vara cambia. El criterio también.

Y poco a poco dejamos de actuar como ciudadanos para comportarnos como hinchas.

Ese es el verdadero riesgo.

Porque cuando la política se transforma en un campeonato de lealtades, la verdad pierde importancia.

Lo único que importa es defender la camiseta.

La camioneta pasará. La polémica también.

Dentro de algunos meses probablemente nadie recuerde los detalles de esta historia.

Pero la pregunta seguirá siendo válida.

¿Estamos evaluando a nuestros gobernantes por sus acciones o por nuestras simpatías?

¿Estamos analizando los hechos o simplemente justificando a quienes ya decidimos apoyar?

La democracia necesita ciudadanos críticos.

No admiradores.

Necesita personas capaces de cuestionar incluso a quienes votaron.

Capaces de exigir explicaciones incluso a quienes les generan confianza.

Capaces de reconocer errores incluso cuando esos errores provienen de su propio sector político.

Porque una república sana no se construye sobre la obediencia.

Se construye sobre el pensamiento crítico.

Y quizás esa sea la verdadera lección que deja toda esta historia.

No importa tanto lo que diga el lobo.

Lo verdaderamente importante es que las ovejas no dejen de pensar.

Como un barril sin fondo

Gustavo GÓMEZ RIAL
Abogado. Escritor



Estas líneas no querrían parecer una crítica despiadada e irreverente a la figura presidencial ni al gobierno actual. ¿Y por qué no? Porque así lo ha apostillado terminantemente el Sr. Sánchez, secretario de la Presidencia. O, en jerga oficialista: ¿por qué no te callas?

A esta gobernanza, dicho con todo respeto a la monarquía y a Juan Carlos, cada vez le sobran más aires virreinales. Cada vez os sentiréis menos ciudadanos con derechos para volveros vasallos de su feudo. ¡Compartiréis lo que se publique en los bandos oficiales!

Tengámosle respeto y debida sumisión si queremos quejarnos de nuestros males; que no por ser señores y feudales habréis de dejar de pagar religiosamente sus impuestos.

No haréis críticas desmesuradas ni emplearéis esa suerte de lenguaje rocambolesco e irónico que pudiere herir a los custodios de la voz del pueblo. De medio pueblo afónico que clama por recuperar esa voz ahora amordazada. No les obligaremos a ellos (que gobiernan con «desgobierngüenza») a que hagan un esfuerzo desmesurado para aprobar las materias que perdieron con la esperanza de que puedan entender lo que les gritamos. Gritémosle fácil desde

esa procedencia. Esta primera mitad de 2026 la cifra estimada acumulada ya supera las 250.000 toneladas.

Sintetizando, no sólo nos estamos librando del crudo pesado venezolano de pésima calidad (perjudicial para nuestra refinera) que negociaron y ataron (con Sendic a la cabeza) los anteriores gobiernos frenteamplistas, sino que estamos accediendo a un crudo que se adecúa de forma excelente a nuestra planta de La Teja y también reduce costos de mantenimiento y de catalizadores químicos. Sumado a eso, los ahorros por concepto de transporte marítimo, logística portuaria, costos financieros, operativa de la refinera, etc., permiten un ahorro para las arcas del Estado de entre un 8 y un 10 por ciento del costo final del crudo puesto en la terminal de la boya petrolera. Sin contar los aumentos de rendimiento en la producción de nafta y gasoil de mayor calidad (que luego mezclan con las de menor calidad) con menor gasto en gestión ambiental de residuos tóxicos y un más bajo consumo energético, los cuales también generan costos y huella de carbono. También contemos que la URSEA basa el cálculo en un precio del barril desde el golfo (Houston), mayor al de traerlo desde Puerto Rosales (o de la próxima terminal del sur atlántico en Punta Colorada, Argentina). Todo suma y a favor de las sedientas arcas de nuestro feudo. ¿Vamos a construir en la UTU Marítima el arca de Oddone en vez de las patrulleras oceánicas?



columnas de opinión, sin sarcasmo. Como le dirías a un pre-adolescente: Vos comés más que un barril sin fondo. O como una lima nueva en Salto.

Para que Oddone entienda, sin lamentarse de la aceleración en el odómetro del gasto, del déficit y de las AFAPS, tendrías que insinuarle que, cada vez que él se queja de los precios del barril de Brent y de que no hay mago de Ormuz que abra hoy el estrecho, en realidad sólo quiere enhebrarte en el agujero más estrecho del conocimiento.

En realidad, no siempre es la realidad la que realmente desvela tanta realceza. Y explico por qué esto me huele mucho más a Vaca Muerta que a pozos en Persia.

Hace pocos años, en especial en las últimas semanas, cuando creció significativamente _ se cuadruplicó en compras de 200.000 toneladas _ el envío de petróleo Medianito desde Vaca Muerta, al precio ficto internacional, con una media de valores más baja que los picos que absorbieron gobiernos anteriores (hoy 89,94 dólares por barril), permite ahorros importantes. Desentmascara los sucesivos e irracionales aumentos de combustibles y tarifas que sólo esconden una voracidad fiscal que tapa ineficiencias y más planes para anestesiar la misera sin superarla.

Mientras que en todo 2023 y 2024 Uruguay sólo pudo importar 62.800 y 224.000 toneladas, respectivamente, de crudo argentino (con nuestra refinera parada durante buena parte del año), el 2025 sumó un total de 240.000 toneladas de

Sumemos que nuestra matriz energética cada vez reduce más el peso porcentual de las importaciones de petróleo en el total de la economía (aunque aún es importante).

Si el viento sopla a favor no necesitaremos velas (remaremos en galeras) ya que, al otro lado del río Uruguay, cerquita en Santa Fe, se beneficiarán del descuento eléctrico. Y no les quepa duda que Milei y Caputo se tirarán de cabeza para aprovechar la oferta de excedentes de temporada y cambiar nuestra energía verde por su aceite pesado. El intercambio es real, aunque lo exponga con sorna. Acaso, sus excelencias habrán puesto en remojo las barbas antes que ver las del vecino arder, intentando ser más mileístas que Milei. Dicen que, en secreto, como si ensayasen desde un palco, oyeron a Fernando Pereira, a Marcelo Abdala y a Juan Castillo (tan feudal) gritar: ¡Arriba los que luchan, cara...! (autocensura, sin aludir a los hermanos brasileños).

Te invito a volver conmigo, de noche, como un ciudadano, después de parar a cargar en la estación y de hacer kilómetros para visitar a algún familiar, mientras los focos encienden niebla, mientras atravesamos la periferia oscura de las calles de la capital. Al fin, la luz difusa entre la niebla de la Avda. José Batlle y Ordóñez, pero todavía luz.

(Mientras lee, escuchese: «Como un burro amarrado en la puerta del baile» «A galeras a remar...» El último de la Fila -1993-)



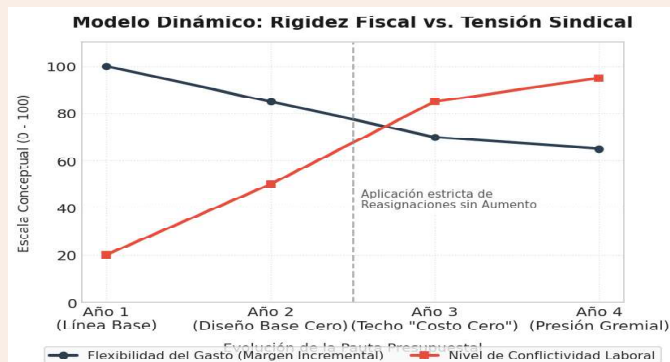
Marcelo GIOSCIA CIVITATE
Abogado. Periodista

Reacciones ante rendición de cuentas costo cero

Según ha trascendido, la primera Rendición de Cuentas de este período de gobierno, luego de promulgada y publicada la Ley No. 20.446 de Presupuesto Nacional (2025-2029) que establece la planificación financiera, asignación de gastos y lineamientos tributarios para este quinquenio, pretende tener para el Ministerio de Economía, un «costo cero», lo que en buen romance quiere significar que no se darán aumentos.

Según las prioridades que han trascendido, será con «reasignaciones de recursos» que se «fortalecerán las áreas de infancia, seguridad, personas en situación de calle y empleo», lo que motivó la decisión de la Central obrera y en especial el gremio de trabajadores del Estado nucleados en COFE a realizar el Paro General Parcial de actividades el pasado 10 de Junio y que se anunciara el incremento de la conflictividad.

En especial los sindicatos docentes de secundaria, los que ya han planificado paros de veinticuatro horas en los liceos de Montevideo, para tres días consecutivos,



discriminándolos por zonas. Otra vez, serán los legisladores los que definirán si mantienen o no las «prioridades» indicadas por el titular de Economía.

Estos sindicatos siguen insistiendo con su reivindicación histórica de obtener se les asigne un 6% del PBI para educación, más el 1% para destinarlo «a la investigación» y han manifestado que van a enfrentar el escenario de esta «restricción fiscal» con movilizaciones y paros.

Con estas medidas, buscan «presionar y concientizar al gobierno», para que aumente el presupuesto educativo debido a las «dificultades de todo tipo» que atraviesa el sector.

Según han manifestado desde el PIT CNT: «el gobierno no está cumpliendo» con lo que se les prometiera en la campaña electoral, pero la realidad indica que no podría alcanzarse a satisfacer tal reclamo, lo que genera «una situación de alerta». Nuevamente el «fuego amigo», proveniente de una central sindical obrera que le es afín, busca presionar al gobierno «de izquierda» para obtener los aumentos presupuestales. Argumentan «dificultades y falta de recursos», como si éstos provinieran de un fondo de extracción infinito e inagotable.

Todo ello, sin proponer efectivamente mejoras concretas en los servicios que brindan, cuando sabido es que, los recursos en sí mismos, no las garantizan.

Padecemos un Estado caro, con una presión tributaria al límite, donde se prometió a la ciudadanía que no se subirían los impuestos, y sin embargo han buscado todas las coartadas posibles para ajustar alícuotas de impuestos ya existentes con la sola finalidad de recaudar más.

Cabe preguntarse si es justo padecer estas movilizaciones en favor de sectores sindicalizados, que en definitiva, afectan a los más vulnerables y a la sociedad en su conjunto.

Mientras esto ocurre, son muchas las empresas que envían a sus trabajadores al seguro de desempleo y deciden afincarse en otros mercados más rentables, mal que le pese al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, empeñado en que se le comuniquen estas decisiones empresariales, en forma previa.

Como si ello pudiera cambiar la realidad que todos advertimos y que a diario nos agobia.



David Auris Villegas
Escritor peruano, columnista pedagógico, profesor universitario. Creador del ABDIVCPCE.
davidauris@gmail.com

La educación innovadora secuestrada por el consumismo digital

Hace unos días revisé en los diarios diversas experiencias de innovación en la educación básica peruana. Me alegró saber que existen cientos de proyectos apoyados por la tecnología digital. Sin embargo, al observar a muchos estudiantes, descubrí una realidad distinta: permanecían hiperconectados, persiguiendo likes, tendencias y videos.

Esta escena refleja una generación obsesionada por aparecer en las redes sociales, donde la visibilidad suele ser fugaz como los likes. Lo preocupante es que muchas escuelas del Perú y de otros países subdesarrollados, creen que innovar consiste únicamente en manejar Zoom, Google Classroom, Moodle, Canva o Kahoot. En realidad, innovar significa crear soluciones, transformar realidades y generar valor y mejorar la sociedad.

Esta tecnología digital ha facilitado innumerables procesos, pero también ha generado una forma de autosecuestro. Hoy, ¿quién no tiene un celular con acceso a internet? Casi todos vivimos tentados por videos que parecen divertidos y educativos, aunque muchas veces comprendemos menos la realidad, pensamos menos críticamente y permitimos que otros decidan nuestro destino, como en el ámbito político.

Precisamente, la mente innovadora es clave para realizarnos en esta jungla de la competitividad, y aquí aparece la visión del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, quien sostiene que la digitalización está convirtiendo al ser humano en unos ciudadanos hiperconectados, ególatra y autocolonizados con limitado pensamiento crítico e insuficiente relación interpersonal. Agrega el filósofo que, vivimos obsesionados por la cultura narcisista del «me gusta». Para hacer frente a este nuevo desafío humano, propone la revolución silenciosa que consiste en reflexionar sobre el poder de la contemplación, cultivar la



amistad basado en el diálogo y dominar nuestro tiempo e ir al encuentro con uno mismo para tener el control de nuestra vida y así hallar el sentido de nuestra existencia.

Ante este desafío, la educación ha de recorrer caminos más allá de los laboratorios y los dispositivos tecnológicos. Su misión es priorizar la construcción del conocimiento, colocando al estudiante como protagonista de la transformación bajo el liderazgo de docentes innovadores capaces de tender puentes hacia una innovación auténtica. En este punto coincide la visión de Elon Musk, para quien innovar significa cuestionar lo establecido y crear soluciones nuevas, creativas y disruptivas que mejoren la vida de las personas, como los vehículos eléctricos que tienen poco impacto ambiental. Por ello, más que formar consumidores de plataformas digitales, las escuelas necesitan formar creadores capaces de aprovechar la tecnología para transformar, producir y mejorar su entorno. La pregunta es inevitable: ¿utilizamos la tecnología digital para expandir la mente de los estudiantes o la usamos para formar una generación de consumidores de tecnología?

Choque de modelos:

Oddone descarta la sobretasa al Patrimonio tras la movilización del PIT-CNT

La persistente tensión entre la política fiscal de consolidación macroeconómica y las demandas de redistribución impositiva sumó un nuevo capítulo estratégico. Tras el paro general parcial llevado adelante por la central sindical PIT-CNT, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, ratificó firmemente la negativa del Poder Ejecutivo a implementar un gravamen de emergencia del 1% al 1% más rico de la población durante el actual ejercicio de gobierno.

EL SUSTENTO TÉCNICO DE LA PROPUESTA SINDICAL El núcleo del debate radica en la propuesta diseñada por el equipo técnico de la central obrera. La iniciativa busca introducir una **sobretasa progresiva anual aplicada al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IPPF)**. El universo impositivo afectaría exclusivamente a los contribuyentes con un **patrimonio fiscal neto superior al mínimo no imponible de US\$ 1.000.000**—lo que equivale a un grupo estimado de unas 25.000 personas en todo el territorio nacional—.

Según los datos esgrimidos por los economistas de la central sindical, este reducido segmento de la sociedad **concentra entre el 37% y el 40% de la riqueza total de Uruguay**. Con tasas progresivas propuestas que van desde el 0,1% hasta el

fuga o relocalización de activos financieros hacia jurisdicciones con menor presión fiscal, neutralizando el potencial de recaudación neta esperado.

Preservación de las metas fiscales fijadas: El plan del MEF tiene como norte la sostenibilidad del déficit, buscando consolidar un **superávit primario del entorno del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB)**. Alterar las reglas de juego fiscales vigentes comprometería la previsibilidad y la calificación crediticia del país.

Protección de la inversión de capital: El gobierno prioriza blindar la formación bruta de capital fijo y la inversión extranjera directa (IED) como los únicos motores válidos para sostener el crecimiento potencial del PIB a largo plazo. El enfoque del ministro dicta que **mantener la inflación por debajo del rango meta del 4%** es una política social mucho más efectiva y de mayor alcance redistributivo que aplicar cargas impositivas directas a la riqueza acumulada.

El desenlace de la jornada expone una fractura conceptual profunda: el movimiento sindical aboga por una «reforma tributaria de segunda generación» orientada a la imposición directa sobre el stock de capital, mientras que el Ejecutivo prioriza la estabilidad de las variables macroeconómicas y los incentivos de mercado como la única vía sostenible para asegurar el empleo y la competitividad internacional del país.

ESTIMACIÓN DE RECAUDACIÓN TEÓRICA Y EL IMPACTO EN LA IED Para comprender el alcance real de la disputa entre el PIT-CNT y el Ministerio de Economía, es necesario analizar las cifras proyectadas de recaudación y los mecanismos de transmisión económica que fundamentan la posición oficial.

Proyección de la recaudación teórica del fondo

Los cálculos técnicos basados en la estructura del stock de riqueza en Uruguay permiten estimar el potencial de ingresos que generaría esta sobretasa del 1%:

Monto imponible estimado: El 1% más rico de la población uruguayaya (unas 25.000 personas) posee activos declarables, participaciones empresariales y propiedades inmuebles que, en conjunto, superan un valor fiscal neto de **US\$ 25.000 millones**.

Potencial de recaudación bruta: La aplicación lineal de una tasa del 1% sobre el excedente del mínimo no imponible (US\$ 1 millón) arrojaría una recaudación teórica de entre **US\$ 200 millones y US\$ 250 millones anuales**.

Equivalencia macroeconómica: Este monto equivale aproximadamente al **0,3% del Producto Interno Bruto (PIB)** de Uruguay. Para la central sindical, estos recursos financiarían de forma directa la eliminación de la pobreza infantil extrema y robustecerían los programas de vivienda pública.

El factor de erosión impositiva: Los economistas advierten que la recaudación real suele ser entre un 30% y un 40% menor a la teórica debido a la elusión fiscal, la subdeclaración de activos físicos y la reestructuración de patrimonios familiares en Sociedades Anónimas.

ARGUMENTOS DEL MINISTRO SOBRE EL IMPACTO EN LA IED El rechazo de Gabriel Oddone no se basa en una falta de voluntad distributiva, sino en el riesgo de alterar la competitividad del país frente a los flujos globales de capital. Sus argumentos técnicos respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED) se desglosan en tres puntos críticos:

Pérdida de competitividad regional: Uruguay ha captado niveles históricos de IED (cerca del 4% del PIB en los últimos años) debido a su estabilidad jurídica y a un esquema de exoneraciones fiscales atractivo. Imponer un tributo al stock de capital, en un contexto regional donde países vecinos buscan flexibilizar sus cargas impositivas, restaría atractivo frente a competidores directos.

El canal de la reinversión de utilidades: Una parte sustancial de la IED en Uruguay no corresponde a capitales nuevos, sino a la **reinversión de utilidades** de empresas multinacionales ya instaladas, cuyos accionistas locales forman parte de ese 1% más rico. Al gravar sus patrimonios personales, se desincentiva la retención de ganancias dentro de las fronteras uruguayas, impulsando el reparto de dividendos hacia el exterior.

Señal de inestabilidad en las reglas de juego: Las decisiones de inversión extranjera a largo plazo (en sectores como el forestal, las energías renovables o el software) dependen de la previsibilidad impositiva. El ministro sostiene que ceder a presiones coyunturales para modificar impuestos directos envía una señal de «riesgo regulatorio», lo que eleva la prima de riesgo exigida por los inversores internacionales y encarece el financiamiento para futuros proyectos.

EL IMPUESTO AL 1% MÁS RICO: ¿JUSTICIA O FRENO AL DESARROLLO? LA RECLAMACIÓN DEL PIT-CNT QUE ENCIENDE EL DEBATE ECONÓMICO



1,5%, el PIT-CNT argumenta que se podría constituir un fondo estatal blindado destinado de forma exclusiva a mitigar la brecha de la pobreza infantil en hogares vulnerables, donde los indicadores sociales muestran niveles críticos estructurales.

LOS ARGUMENTOS DE ESTABILIDAD DEL MEF Desde la vereda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone desactivó la viabilidad del mecanismo apoyándose en la ortodoxia económica y en el control de las **condicionantes de la macroeconomía local**. Los pilares técnicos que sostienen el rechazo oficial se estructuran bajo tres argumentos principales:

Efectos de conducta y relocalización de activos: Oddone ha advertido sobre los impactos colaterales de las «respuestas conductuales» de los grandes capitales. La introducción de alcuotas impositivas al patrimonio líquido suele inducir a una

MARCELO ABDALA: "¡ES HORA DE QUE LOS QUE MÁS TIENEN PAGUEN MÁS!"



Lorenzo AGUIRRE
Periodista. Escritor. Asesor Cultural,
Músico. Director de Orquesta

El juego de la mentira... ¡por el poder!

Con una participación de 73.81% de votantes (20.167.745), se llevó a cabo en Perú, la segunda vuelta de presidenciales, en un marco de «dos mapas», con «geografía electoral», y 2.373.000 papeletas en blanco, señalando falta de interés y hartazgo por el «juego y mentiras de la clase gobernante». El «Jurado Nacional de Elecciones» («JNE»), manifestó que los resultados oficiales estarán a mediados de julio, y el fallo, será inapelable, mientras la «Oficina Nacional de Procesos Electorales» expresó que, hasta el momento, se encuentran escrituradas 97% de actas. Al cierre de nuestra página «Crónica Internacional» – madrugada del sábado 13 de junio -, Keiko Fujimori («Fuerza Popular») lideraba con 50.02%, pautando una diferencia de 4.000 votos frente a Roberto Sánchez («Juntos por el Perú»), 49.98%. En estos comicios – donde se disputa un reordenamiento en el tablero político, y la proyección e incidencia dentro del universo latinoamericano -, se maneja de un lado y otro, la fatigada palabra «fraude», pero hasta el momento no existen pruebas, ni actas adulteradas, como tampoco denuncias. Por lo expresado, si dicen, «hay fraude porque no dan los resultados» ... ¡no es cierto! Simplemente ¡Burocracia!, y ¡total falta de vergüenza!

En una década, Perú, tuvo 8 mandatarios, de los cuales 6 fueron destituidos y cuatro de ellos «invitados» a ser «arrendatarios» y compartir «Barbadillo», el «All Inclusive» inaugurado para acoger al expresidente Alberto Fujimori, luego, juzgado y sentenciado a 25 añitos de prisión.

La residencia «presidencial» - a 20 km de Lima -, alberga figuras «consulares» como, Ollanta Humala, que desde abril del pasado año cumple «retiro espiritual» por casos vinculados a la empresa brasileña «Odebrecht», y en una suite del mismo piso, el ignorante, patético, e inmoral Pedro Castillo, marxista – leninista, apoyando el pensamiento de su ídolo «Che» – entusiasta comunista, vulgar panfletario, hombre lleno de odio destilando veneno por doquier, racista empedernido, burgués jugador de rugby, y tenis, que consideraba a

Tahuantinsuyo» - agrupación radical vinculada a la organización islámica «Inkarri Islam», quien recluta jóvenes -, mientras en forma paralela, crecían centros islámicos chiitas en Lima, Cusco, y Arequipa, a efectos de «estimular» la revolución iraní en Perú.

SÁNCHEZ, AHIJADO POLÍTICO DE PEDRO CASTILLO Roberto Sánchez - portando el sombrero campesino regalado por Pedro Castillo -, expresó reivindicar al referido exmandatario y golpista, liberarlo de una condena a 11 años, 5 meses, y 15 días de cárcel, por delito de conspiración y rebelión al haber intentado disolver el Congreso - según el «Tribunal de Justicia de Perú» -, como, asimismo, manifestar su lealtad y promesa de continuar el camino.

Sánchez, se ha tomado fatal las cosas, pues, la Justicia de Perú, decidió el pasado viernes 5 de junio – a tan solo 48 horas de la segunda vuelta electoral presidencial - enviarlo a juicio por presuntas declaraciones falsas en el financiamiento de su partido.

Roberto Sánchez, habría recibido unos 60 mil dólares - aportes de integrantes de su movimiento político - destinados a actividades partidarias, pero no fueron declaradas ante la «Oficina Nacional de Procesos Electorales».

La «fiscalía general de Perú», pidió una pena de 5 años, y 4 meses.

PARA EL BALOTAJE, «NUEVO» PROGRAMA DE GOBIERNO Ahora, en segunda vuelta electoral, Roberto Sánchez – destacado por su inestabilidad política – reptante ante Estados Unidos, hablando de entablar buenas relaciones con el «facho presidente yanqui» Donald Trump, y resalta que, ese vínculo, «va a ser nuestra vocación de gobierno». Además, Sánchez, propone estrechos lazos comerciales, y no poner vetos a la inversión internacional, más allá de referirse a la relevancia del nuevo «Puerto de Chancay» – de capital chino -, como asimismo con Estados Unidos concretar emprendimientos importantes, refiriéndose especialmente al proyecto portuario en la costa del Pacífico –llamado «Corio» -, el cual tendría una magnitud cinco veces superior.

El candidato ultraizquierdista también señala respetar los acuerdos internacionales vigentes, y en «asuntos internos» eliminar la propuesta de creación de «veedurías ciudadanas», y «supervisar» los medios de comunicación.

HABLEMOS, DE KEIKO... Keiko Fujimori, es la cuarta vez que se presenta a las presidenciales - líder de «Fuerza Popular», de ideología fujimorismo, anticomunismo, posición derecha, extrema derecha -, pero a lo largo del tiempo sus dichos provocaron polémica, como, asimismo, ira, siendo acusada de no respetar el medio ambiente, más allá que se comprometiera con la «Central de Mineros», a regularizar la minería informal, además de incluir la derogación de



homosexuales y lesbianas, «degenerados viciosos repugnantes que deben ser confinados a campos de concentración para reeducación socialista» -, y que integrara el «Comité Nacional de Reorientación», organización dirigida por Alfredo Crespo, abogado y «guía» de «Sendero Luminoso».

El muchacho Castillo, fue sostén de «Hezbollah» – brazo derecho de Irán -, ocupándose de «Relaciones Públicas» y siendo «mánager» de alrededor de 400 peruanos que se convirtieron al Islam Chiita – seguidores de «Alí», yerno de Mahoma, mientras que la otra rama, «Sunitas» ortodoxos, son continuadores de los primeros califas sucesores de Mahoma -, los cuales «vacacionaron» en Irán.

Pedro Castillo y «Sendero Luminoso» se preocuparon del entrelazamiento y adoctrinamiento islámico utilizando como «escala y punto de conexión» la «esencia» «Etnocacerista» (ultraizquierda) - doctrina política nacionalista indígena -, a través de la «Asociación Plurinacional de Reservistas del

los derechos legislativos promulgados por Ollanta Humala.

También, vale hacer memoria respecto a su promesa a pastores evangélicos, que defendería la familia entre hombres y mujeres – no, entre personas del mismo sexo -, y señaló oponerse a legalizar el aborto, la unión civil, y la adopción de niños por parte de homosexuales. Más tarde, en una conferencia en la Universidad de Harvard, Keiko Fujimori se mostró a favor de la unión civil, y del aborto.

Entre otros «Ítems», en los últimos tiempos, la «International Consortium of Investigative Journalists» había puesto sobre la mesa, que, familiares de Keiko Fujimori estaban involucrados con varias compañías «offshore», y denunciaron la sospecha que, el financiamiento de «Fuerza Popular» – Keiko, es presidente -, fue por intermedio de fondos provenientes de lavado de activos, según lo investigado por el Ministerio Público.

El dolor que algunos desprecian

Mientras Uruguay discute grandes reformas, existe una realidad cotidiana que continúa sin reconocimiento legal. Miles de trabajadores enfrentan cada año la pérdida de un animal de compañía que formó parte de su familia, sin que el derecho contemple siquiera un mínimo espacio para procesar ese duelo. El proyecto presentado busca instalar un debate de fondo sobre salud mental, bienestar animal y la capacidad del Estado para acompañar los cambios culturales de nuestro tiempo.



Las sociedades suelen medirse por la forma en que responden a los grandes desafíos económicos, políticos o institucionales. Sin embargo, también revelan su grado de desarrollo humano a través de su capacidad para comprender los dolores cotidianos, esos que muchas veces no ocupan titulares ni generan grandes debates parlamentarios, pero que forman parte de la experiencia real de millones de personas. La muerte de un animal de compañía pertenece a esa categoría de acontecimientos que durante mucho tiempo

fueron considerados asuntos estrictamente privados, casi invisibles para el derecho y para las políticas públicas. Sin embargo, la realidad social ha cambiado profundamente y las leyes deben ser capaces de acompañar esas transformaciones.

Convencido de esa necesidad, presenté en el Parlamento un proyecto de ley que reconoce una licencia remunerada por duelo ante el fallecimiento de un animal de compañía. La iniciativa busca incorporar al ordenamiento jurídico una realidad que miles de trabajadores uruguayos experimentan cada año y que hasta hoy permanece sin reconocimiento específico en nuestra legislación laboral.

Quienes han compartido años de su vida con un perro, un gato u otro animal de compañía conocen perfectamente la dimensión de esa pérdida. No desaparece solamente una mascota. Se extingue una presencia cotidiana que acompañó rutinas, celebraciones, dificultades familiares y momentos de soledad. Se rompe un vínculo afectivo construido durante años de convivencia y cuidado mutuo. Para miles de personas, especialmente adultos mayores, personas que viven solas, niños y familias sin hijos, estos animales ocupan un lugar emocional central dentro del hogar.

Durante décadas, la política discutió los derechos laborales casi exclusivamente desde una perspectiva económica. Horarios, salarios, descansos, seguridad laboral y protección social fueron temas fundamentales para la construcción de sociedades más justas. Sin embargo, el desarrollo del derecho laboral moderno ha demostrado que la dignidad del trabajador no puede reducirse únicamente a aspectos materiales. También incluye su salud emocional, su bienestar psicológico y la posibilidad de armonizar el trabajo con las distintas circunstancias de la vida personal.

Es precisamente desde esa perspectiva que elaboré y presenté este proyecto de ley que propone reconocer una licencia remunerada de un día hábil ante el fallecimiento de un animal de compañía. No se trata de una iniciativa extravagante ni de un privilegio innecesario. Se trata de reconocer una realidad humana que ya existe y que el derecho todavía no contempla adecuadamente.

Algunos críticos sostienen que el Estado no debería intervenir en este tipo de situaciones porque existen problemas más urgentes. Es un argumento que suele aparecer cada vez que se propone ampliar derechos o adaptar las normas a nuevas realidades sociales. Sin embargo, la historia demuestra que el progreso jurídico nunca avanzó esperando que desaparecieran todos los demás problemas. Las sociedades más avanzadas son precisamente aquellas que logran atender simultáneamente los grandes desafíos colectivos y las necesidades concretas de las personas.

La evidencia científica acumulada durante las últimas décadas resulta contundente. Numerosos estudios en psicología, psiquiatría y salud pública han demostrado que los animales de compañía desempeñan funciones relevantes en el bienestar emocional de las personas. Reducen sentimientos de soledad, favorecen la socialización, disminuyen niveles de ansiedad y contribuyen positivamente a la salud mental. Cuando ese vínculo se interrumpe por la muerte del animal, el impacto emocional puede ser significativo.

La psicología contemporánea reconoce incluso la existencia del denominado duelo por mascotas como una experiencia legítima y emocionalmente relevante. Lejos de tratarse de una reacción exagerada, constituye una respuesta normal ante la pérdida de un ser con el cual se desarrolló un fuerte lazo afectivo. Ignorar esta realidad no elimina el sufrimiento. Simplemente deja a las personas sin reconocimiento institucional frente a una situación que afecta su bienestar.

La propuesta legislativa que impulsamos tampoco representa una carga desproporcionada para las empresas ni altera el equilibrio general del sistema laboral. La licencia se limita a un día hábil por año calendario y exige mecanismos claros de acreditación mediante constancia veterinaria u otra documentación equivalente. Existen controles, límites y procedimientos precisos que permiten evitar abusos y garantizar un uso responsable del beneficio. Lejos de promover privilegios, la iniciativa busca corregir una situación de desigualdad que actualmente obliga a muchos trabajadores a utilizar licencias comunes,

solicitar favores personales o enfrentar dificultades laborales para poder afrontar un momento emocionalmente complejo.

Además, Uruguay posee antecedentes históricos que permiten comprender esta propuesta dentro de una tradición humanista más amplia. A comienzos del siglo XX, bajo la influencia reformista de José Batlle y Ordóñez, el país adoptó decisiones que reflejaban una sensibilidad ética innovadora para su tiempo. Entre ellas se destacó la prohibición de las corridas de toros, una medida que expresaba una concepción del progreso vinculada no solamente al desarrollo económico, sino también a la construcción de una sociedad más civilizada y respetuosa hacia los animales.

Aquella decisión fue mucho más que una simple regulación de espectáculos públicos. Constituyó una declaración de principios acerca del tipo de convivencia que Uruguay aspiraba a construir. Representó la convicción de que el avance social también implica revisar nuestras relaciones con otros seres vivos y desarrollar formas más empáticas de convivencia.

Sin embargo, reconocer el valor afectivo de los animales también obliga a enfrentar una contradicción que Uruguay arrastra desde hace años. Mientras la sociedad reclama respuestas cada vez más firmes frente al abandono, la crueldad y las distintas formas de maltrato animal, la política continúa acumulando diagnósticos, declaraciones y promesas que rara vez se transforman en soluciones concretas. Las imágenes de animales abandonados, torturados o muertos por actos de violencia generan indignación colectiva, pero esa indignación suele agotarse mucho antes de llegar a una reforma legal profunda. Por esa razón, junto con esta iniciativa sobre licencia por duelo, considero imprescindible avanzar hacia una legislación más moderna y efectiva en materia de protección animal. Uruguay necesita discutir seriamente herramientas jurídicas capaces de prevenir y sancionar el abandono, la tortura, la crueldad y la muerte provocada por actos de maltrato. No alcanza con la indignación pública cada vez que un caso se vuelve viral u ocupa espacio en los medios de comunicación. El país necesita normas más firmes, mejores mecanismos de fiscalización y una política pública sostenida que fortalezca la tenencia responsable y la protección efectiva de los animales. Porque una sociedad que tolera el sufrimiento injustificado de los seres más vulnerables termina debilitando también sus propios valores éticos.

Más de un siglo después, la realidad social presenta nuevos desafíos. Los hogares multiespecie se han convertido en una característica habitual de la vida contemporánea. Millones de personas en todo el mundo consideran a sus animales de compañía integrantes esenciales de su entorno afectivo. Las leyes no pueden permanecer congeladas frente a cambios culturales tan evidentes.

Diversos países han comenzado a recorrer caminos similares. En algunas regiones de Europa y América del Norte existen convenios laborales, reglamentos internos y acuerdos empresariales que contemplan permisos especiales vinculados a la muerte de animales de compañía. Aunque las soluciones jurídicas varían, el principio subyacente es el mismo. Reconocer que el bienestar emocional forma parte de la calidad de vida y que las relaciones afectivas contemporáneas adoptan formas cada vez más diversas.

La legislación uruguaya ya avanzó en el reconocimiento de la protección animal mediante la Ley N° 18.471 y a través de la institucionalidad desarrollada en torno al bienestar animal. Sin embargo, todavía persiste una brecha entre ese reconocimiento y la realidad emocional de quienes ejercen una tenencia responsable y establecen vínculos duraderos con sus animales.

La propuesta de licencia por duelo procura precisamente cerrar esa distancia. No equipara jurídicamente a los animales con las personas. No modifica las categorías tradicionales del derecho de familia ni del derecho laboral. Lo que hace es algo mucho más sencillo y razonable. Reconoce que determinadas experiencias humanas generan consecuencias emocionales que merecen una respuesta normativa proporcional.

Por esa razón, este proyecto no debe interpretarse únicamente como una modificación puntual del régimen de licencias laborales. Aspira a ser también una señal cultural y política. Busca expresar que el Estado es capaz de comprender las transformaciones que vive la sociedad uruguaya y de adaptar sus instituciones a nuevas formas de convivencia, afecto y responsabilidad.

En definitiva, esta discusión trasciende ampliamente la duración de una licencia laboral. Lo que está en juego es la capacidad del sistema jurídico para comprender los cambios culturales de su tiempo y responder con sensibilidad, equilibrio y sentido común.

Una sociedad verdaderamente moderna no es aquella que solamente protege la producción y la eficiencia. Es también aquella que reconoce el valor de los afectos, la importancia de la salud mental y la necesidad de que las instituciones acompañen a las personas en los momentos difíciles.

La aprobación de la iniciativa que he presentado significaría un paso más en la construcción de un Uruguay que no tenga miedo de incorporar nuevas sensibilidades a su marco jurídico. Un país capaz de entender que la calidad de vida no se mide únicamente por variables económicas, sino también por la capacidad de reconocer los vínculos que dan sentido a la existencia cotidiana.

Quienes alguna vez despidieron a un compañero de cuatro patas saben que no se trata simplemente de la muerte de una mascota. Se trata de la partida de alguien que formó parte de la historia diaria de una familia, de los afectos más sinceros y de una relación construida sobre la lealtad y el cariño incondicional. Esa es la realidad que este proyecto de ley pretende reconocer. Y reconocer ese dolor no debilita al derecho. Lo vuelve más humano. Y una sociedad que se vuelve más humana nunca retrocede. Avanza.

Luis Marcelo PÉREZ

Diputado por el Partido Colorado
Escritor. Periodista. Vicepresidente del PEN
Club Uruguay. Gestor Cultural

